



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-009-2020-00332-01
Demandante: Cesar Alberto Vásquez Fonnegra
Demandadas: AFP Porvenir S.A.
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia
Junta Nacional de Calificación de Invalidez
Asunto: Apelación de auto
Procedencia: Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente: Sandra María Rojas Manrique
Tema: Decreto de Pruebas

Medellín, agosto treinta (30) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, como Magistrada Ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la AFP Porvenir S.A., respecto del auto que negó el decreto de las pruebas solicitadas mediante oficio, proferido el 26 de julio de 2023 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por Cesar Alberto Vásquez Fonnegra contra la AFP Porvenir S.A., la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, conocido con el Radicado Único Nacional 05001-21-05-017-2023-00047-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor Cesar Alberto Vásquez Fonnegra instauró demanda ordinaria laboral pretendiendo se declare la ineficacia de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por el Grupo de Medicina Laboral de Seguros Alfa S.A., la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y en su lugar, se practique una nueva calificación.

De consiguiente, pretende se condene a la AFP Porvenir S.A. al reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común; se condene a las Juntas Regional y Calificación de Calificación de Invalidez, a la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extramatrimoniales ocasionados, o en subsidio, los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y se condene en costas a las entidades demandadas (doc.02, carp.01).

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado judicial legalmente constituido, la **Junta Nacional de Calificación de Invalidez** se opuso a la prosperidad de las pretensiones, arguyendo que la decisión emitida por su prohijada cuenta con pleno soporte probatorio, al guardar concordancia con las disposiciones legales y técnicas que rigen la calificación de la pérdida de capacidad laboral, conforme a la condición real del paciente para la fecha de la calificación y en virtud a los lineamientos del Decreto 1072 de 2015.

En su defensa excepcionó de mérito la legalidad de la calificación expedida por la junta nacional de calificación de invalidez; falta de requisitos legales para formular solicitud de condena de carácter pecuniario; ausencia de prueba sobre el perjuicio que se aduce: inexistencia de los presupuestos legales para pretender una indemnización; improcedencia del petitum ante la inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen: carga de la prueba a cargo del contradictor;

improcedencia de las pretensiones respecto a la junta nacional de calificación de invalidez - competencia del juez laboral; buena fe; y la genérica (doc.05, carp.01).

Por su parte, la **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** resistió la prosperidad de las pretensiones incoadas aseverando que el dictamen que emitido por su representada se ciñó estrictamente a lo dispuesto en el Manual Único de Calificación de Invalidez, con sustento fáctico en los antecedentes médicos y clínicos aportados para la calificación, en donde la incapacidad laboral del demandante no alcanzó el porcentaje requerido legalmente para el estado de invalidez; de consiguiente, propuso las excepciones de fondo que denominó la legalidad, eficacia y obligatoriedad del dictamen; y prescripción (doc.06, carp.01).

Finalmente, la **AFP Porvenir S.A.** se opuso a la prosperidad de las pretensiones, manifestando que la Compañía de Seguros Alfa S.A., la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez eran las entidades competentes para calificar la pérdida de capacidad laboral del señor César Alberto Vásquez Fonnegra, respecto de quien determinaron que el afiliado no ostenta la calidad de inválido; razones por las cuales excepcionó prescripción; inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda y falta de acreditación de los requisitos legales para reconocer la pensión de invalidez; petición antes de tiempo; compensación; buena fe; afectación de la sostenibilidad financiera del sistema; y la innominada o genérica (doc.07, carp.01).

Para los efectos antes descritos, la AFP Porvenir S.A., solicitó oficiar a la EPS SURA S.A. para que certifique si el actor se encuentra en tratamientos médicos, indicando si corresponden a las circunstancias de salud que originaron el concepto desfavorable de rehabilitación y/o si corresponden a nuevas patologías, informando la evolución de las mismas; así mismo para que indique si el actor se encuentra incapacitado o imposibilitado para trabajar; y a DAR AYUDA TEMPORAL S.A. para que certifique la cual es vínculo contractual que tiene con

el demandante, precisando el cargo y funciones desempeñadas, y si se encuentra prestando efectivamente el servicio personal, o hasta cuando prestó el mismo (págs.18-19, doc.07, carp.01).

1.3.- DECRETO DE PRUEBAS

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto proferido en el 26 de julio de 2023, negó el decreto de los oficios solicitados por la AFP Porvenir S.A., arguyendo que los mismos no resultan útiles ni pertinentes para dirimir la controversia planteada respecto de la eficacia de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral rendidos por las entidades demandadas, lo cual solo puede determinarse mediante prueba técnica practicada con sustento en los mismos medios probatorios que se tuvieron en cuenta en las calificaciones cuestionadas, a efectos de poder cotejar las circunstancias evaluadas (minuto 11:20, doc.11, carp.01; doc.12, carp.01).

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

La poderhabiente judicial de la **AFP Porvenir S.A.** interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación procurando que se revoque la decisión de primer grado, y en su lugar, se decreten las pruebas solicitadas en la contestación de la demanda, y se libren los oficios peticionados, sustentando que los oficios solicitados son útiles, pertinentes y conducentes, porque con los mismos se procura determinar cuáles fueron las patologías que se tuvieron en cuenta al concepto desfavorable de rehabilitación del demandante, si el mismo ha estado incapacitado para trabajar, cuáles fueron las funciones para las que fue contratado por su empleador, y si ha prestado personalmente el servicio contratado; medios demostrativos con los que además, aseveró, podría comprobarse el momento hasta el que el accionante tuvo la capacidad para laboral, o si contó capacidad laboral residual; máxime si se tiene en cuenta que el reconocimiento de la pensión de invalidez fue pretendido en el libelo genitor, cuyo retroactivo se encuentra sujeto o condicionado a la determinación de la fecha de estructuración, al pago

de incapacidades y/o la prestación efectiva del servicio (minuto 00:20:30 doc.11, carp.01; doc.12, carp.01).

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la vocera judicial de la **AFP Porvenir S.A.** reiteró los argumentos esbozados con la sustentación del recurso de alzada, insistiendo en que las pruebas no decretadas realmente son útiles, conducentes, y necesarias para dirimir la controversia planteada (doc.03, carp.01).

2.- CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

La competencia de esta corporación está dada por los puntos que fueron objeto de apelación por la **AFP Porvenir S.A.** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y lo previsto en los artículos 65 y 66 del Código de Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificados por los artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001.

2.1.- PROBLEMA JURÍDICO

Le corresponde a la Sala determinar:

¿Si las pruebas solicitadas mediante oficio por la AFP Porvenir S.A. son útiles, pertinentes y conducentes para dirimir la controversia planteada?

2.3.- TESIS DE LA SALA

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual las pruebas solicitadas mediante oficio por la AFP Porvenir S.A. son útiles, pertinentes y conducentes para dirimir la controversia planteada respecto de la calificación de pérdida de capacidad laboral del demandante, y el reconocimiento y pago de la

pensión de invalidez; debiendo **revocarse** el auto por medio del cual se negó su decreto.

2.4.- PREMISAS NORMATIVAS

De conformidad con el 164 del Código General del Proceso, aplicable al caso por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social *“Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho.”*

El artículo 167 del Código General del Proceso, atribuye a las partes la carga procesal de *“probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*.

En esta perspectiva toda persona tiene derecho a “presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra” como una garantía propia del debido proceso, regulado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Adicionalmente, es del caso memorar que el artículo 169 ibíd. prevé:

“ARTÍCULO 169. PRUEBA DE OFICIO Y A PETICIÓN DE PARTE. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes”.

2.5.- CASO CONCRETO

De la normatividad antes descrita se infiere que para decretar la práctica de las pruebas solicitadas por las partes éstas deben cumplir con los requisitos de utilidad, pertinencia y conducencia. La utilidad es el servicio que presta la prueba para ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos sobre los cuales se base la pretensión contenciosa; la conducencia es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho; y la pertinencia es la

relación que debe existir entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso¹.

Ahora bien, memórese que lo pretendido por la parte actora no es solo que se declare la ineficacia de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por el Grupo de Medicina Laboral de Seguros Alfa S.A., la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y en su lugar, se practique una nueva calificación, pues consecuentemente, pretende se condene a la AFP Porvenir S.A. al reconocimiento y pago retroactivo de la pensión de invalidez de origen común (pretensiones 6 y 7, doc.02, carp.01), siendo del caso relieves que, en efecto, conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, la referida prestación comienza a pagarse desde la fecha en que se estructura el estado de invalidez, y que el artículo 3º del Decreto 917 de 1999 estableció que dicho estado se produce cuando se genera una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva, fecha que debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica; precepto normativo que además trajo consigo la prohibición de percibir cualquier prestación pensional mientras se esté recibiendo subsidio por incapacidad.

Así mismo, si llegare a establecerse que el pretensor presenta una enfermedad catastrófica, crónica, degenerativa o congénita, conviene memorar que la jurisprudencia ha variado su línea de entendimiento respecto del momento desde el que se contabiliza la densidad de semanas que dan lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez, sin referirse en término estricto a un cambio en la fecha de estructuración dictaminada, resultando posible que se tenga en cuenta (i) la fecha de elaboración del dictamen, (ii) la fecha de solicitud de la pensión, o (iii) la fecha en la que se efectuó la última cotización, bajo el entendido de que es esa calenda en la que se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando, siempre y cuando, las cotizaciones posteriores a la

¹ *Manual de Derecho Probatorio* pág-27, Jairo Parra Quijano. Ediciones Librería El Profesional - Bogotá.

estructuración sean producto de la capacidad laboral residual que posiblemente le permitió desempeñar una labor y en esa medida trabajar y cotizar (SU-588 de 2016 y CSJ SL3275-2019, SL3992-2019, SL770-2020, SL5023-2021, SL002-2022).

Ahora bien, es cierto que el numeral 10 del artículo 78 del Código Procesal de Trabajo le impone a las partes y sus apoderados el deber de “... *abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir*”, y que el en el inciso 3° del artículo 173 ibídem establece que “... *el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida*”.

Sin embargo, y conforme a lo previsto en el en el artículo 24 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2005, tienen el carácter de reservados, los documentos que “... *involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica*”.

Así las cosas, se constata que la AFP Porvenir S.A. no habría podido acceder a la información solicitada mediante oficio, a la cual, según lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1266 de 2008, solo pueden acceder, además de los titulares, las personas autorizadas por éstos, o sus causahabientes “... *cualquier autoridad judicial, previa orden judicial*” (literal c)).

Finalmente, la Sala advierte que, aunque la cognoscente de instancia indicó que la controversia planteada solo podía dirimirse con base en la prueba técnica que se practicada con sustento en los mismos medios probatorios que se tuvieron en cuenta en las calificaciones cuestionadas, como razón para negar la práctica de las pruebas solicitadas mediante oficio por la AFP Porvenir S.A., decretó de manera

oficiosa la incorporación de la historia clínica *actualizada* del demandante, siendo ello incongruente con lo sustentado al momento de tomar de la decisión apelada.

En glosa de lo anterior, esta corporación considera que las pruebas solicitadas mediante oficio por la AFP Porvenir S.A., son útiles, pertinentes y conducentes para dirimir la controversia planteada, siendo necesaria la intervención del juez de la causa para que puedan ser arrimadas al proceso.

Adicionalmente, se advierte que las mismas guardan coherencia con la tesis de defensa planteada por la AFP Porvenir S.A., quien excepcionó la falta de acreditación de los requisitos legales para reconocer la pensión de invalidez, bajo la tesis de que el señor Cesar Alberto Vásquez Fonnegra no perdió la capacidad para laborar en un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%).

En glosa de todo lo anterior, se **revocará** la decisión adoptada en la primera instancia, y en su lugar, se decretará la práctica de aquellas pruebas. Sin costas en esta instancia por haber alcanzado prosperidad el recurso de apelación impetrado por la AFP Porvenir S.A.

3.- DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

RESUELVE

1.- Se **REVOCA** el auto que auto que negó el decreto de las pruebas solicitadas mediante oficio por la AFP Porvenir S.A., proferido el 26 de julio de 2023 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por Cesar Alberto Vásquez Fonnegra contra la AFP Porvenir S.A., la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y en su lugar, se decreta la práctica de las mismas, en los términos en los que fueron solicitadas.


- *Oficiese a la EPS SURA S.A. para que certifique si el señor Cesar Alberto Vásquez Fonnegra se encuentra en tratamientos médicos, indicando si corresponden a las circunstancias de salud que originaron el concepto desfavorable de rehabilitación y/o si corresponden a nuevas patologías, informando la evolución de las mismas; así mismo para que indique si el actor se encuentra incapacitado o imposibilitado para trabajar*
- *Oficiese a DAR AYUDA TEMPORAL S.A. para que certifique la cual es vínculo contractual que tiene con el demandante, precisando el cargo y funciones desempeñadas, y si se encuentra prestando efectivamente el servicio personal, o hasta cuando prestó el mismo (págs.18-19, doc.07, carp.01).*

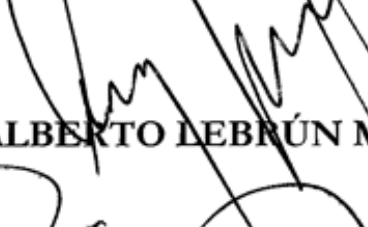
2.- Sin costas en esta instancia.

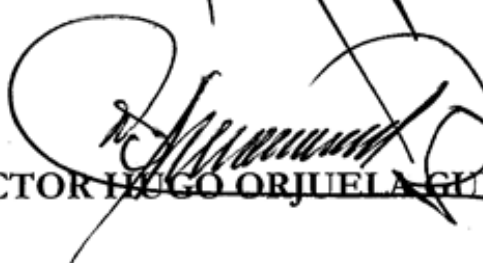
3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el numeral segundo del literal c) artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

El presente auto fue notificado en los Estado N°151 fijados en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 31 de agosto de 2023

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario

Sala Quinta de Decisión I

Calle 14 No.48-32. Edificio Horacio Montoya Gil. Medellín -Antioquia